

# Revista de Derecho

## SUMARIO:

<b>Editorial:</b>	<b>Régimen tributario.</b>
<b>Humberto Bianchi V.:</b>	<b>La Consulta. Exposición de prácticas judiciales.</b>
<b>V. Loewenwarter:</b>	<b>Derecho Civil Alemán. Algunas características.</b>
<b>Alfredo Larenas:</b>	<b>El patrimonio reservado de la mujer casada, según la nueva legislación. (Continuación).</b>
<b>Raúl Rettig G.:</b>	<b>Tomás Hobbes- Su filosofía jurídica.</b>
<b>Dra. Telma Reca:</b>	<b>La individualización de la pena y el tratamiento de la delincuente.</b>
<b>Jurisprudencia:</b>	<b>Sobre cumplimiento de exhorto. De los efectos que produce la omisión de una deuda en el mandamiento de embargo. Del derecho a alimentos. Nulidad de escritura. Posesión efectiva. De una resolución no apelable. Sobre manifestación minera. Nombramiento de administrador pro-indiviso. De la pluralidad de embargos.</b>

**LIBROS Y REVISTAS**

**LEYES Y DECRETOS**

**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN — Chile**

mejor título, de lo que se deduce que si el Fisco estima que su derecho sobre esta herencia es preferente al de los peticionarios, puede ejercitar las acciones legales, sin que para esto sea necesario que el Juzgado niegue lugar a la inscripción de la posesión efectiva de ella, en circunstancias que ningún legítimo contradictor se ha opuesto a su concesión;

5.º) Que, finalmente, hay que considerar que la intervención que la ley N.º 5427 dá a la Dirección General de Impuestos Internos en la tramitación de las gestiones sobre posesión efectiva, no tiende propiamente a garantizar los eventuales derechos del Fisco como heredero, sino el pago del impuesto de herencia que los beneficiarios deben satisfacer, y este punto de vista se confirma al observar que la ley no señala ninguna actuación especial de la Dirección General de Impuestos Internos si el Juez, como en el caso actual, ordena la inscripción de la

posesión efectiva no obstante su dictamen contrario, y, en cambio, el art. 54, — que está en el capítulo de la ley referente a la determinación definitiva del monto imponible, — prescribe que la Dirección debe ser notificada personalmente o por cédula de la resolución que apruebe en todo o parte los actos particionales, y el art. 55 dispone que, si no se deduce el recurso de apelación en el plazo de quince días, se entiende aprobado el monto del impuesto fijado por el Tribunal.

Se confirma, en la parte apelada, la resolución de fecha 6 de Noviembre pasado, corriente a fs. 20.

Devuélvase.

Redactada por el Ministro señor Quezada.

(Fdos.): M. Núñez U.— Mario Léniz Prieto.— Franklin Quezada R.— Urbano Marín.— Pronunciada por la Ilma. Corte.— E. Vásquez, Sec.

### **De una resolución no apelable**

*DOCTRINA.*—El ejecutado no tiene derecho para interponer recurso de apelación en contra de la resolución que ordena des-

pachar el mandamiento ejecutivo.

Con un voto en contra del Ministro señor Marín.

De una resolución no apelable

467

Temuco, dieciocho de Junio de mil novecientos treinta y cinco.

Vistos y teniendo en consideración:

1.º Que el art. 463 del Cód. de Proce. Civil establece que el Juez examinará el título y despachará o denegará la ejecución, sin audiencia, ni notificación del demandado, aún cuando se hubiere apersonado al juicio, lo que está indicando que aquél no puede embarazar el procedimiento preliminar a la ejecución;

2.º) Que esto se corrobora con la misma disposición que así lo establece en forma imperativa y que agrega que sus gestiones sólo podrán ser estimadas como datos ilustrativos, para apreciar la procedencia o improcedencia de la acción;

3.º) Que, de aquí se deduce, que al ejecutado no se le oye, ni puede formular peticiones que deban ser resueltas por el Tribunal, todo lo cual se encuentra de acuerdo con la naturaleza del juicio ejecutivo, que es una acción rápida tendiente, no a obtener la declaración de un derecho, sino a que éste se haga efectivo;

4.º) Que el juicio ejecutivo empieza con la resolución que ordena despachar mandamiento de ejecución, y el deudor sólo

puede deducir reclamo al oponer algunas de las únicas excepciones que determina el art. 486 del Código citado;

5.º) Que, si al ejecutado no le es lícito hacer peticiones antes de que se despache el mandamiento de ejecución, menos puede aceptársele que deduzca el recurso de apelación en su contra.

Por estos fundamentos, se declara improcedente el recurso de apelación deducido a fs. 13, contra la resolución de fecha 5 de Diciembre pasado, escrita a fs. 5, en cuanto ordena despachar mandamiento de ejecución en estos antecedentes.

Acordada contra el voto del Ministro señor Marín, quien estuvo por entrar a conocer de la apelación interpuesta por el ejecutado en contra de la referida resolución de fs. 5. en la parte que es objeto del recurso, en mérito de las siguientes razones:

I. Que la resolución que el Juez dicta cuando se le pide que despache mandamiento de ejecución, es una verdadera sentencia interlocutoria, porque, de conformidad al inc. 3.º del art. 165 del Cód. de Proc. Civil, "resuelve sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva";

II. Que, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 210 del mismo Código, las sentencias interlocutorias de primera instancia son apelables, "salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso";

III. Que, dados los términos de la disposición que se acaba de citar, que exige para que no proceda la apelación que la ley la deniegue expresamente, resulta evidente que la resolución que ordena despachar el mandamiento ejecutivo es apelable, ya que no es posible sostener que las expresiones del art. 463 del Código aludido puedan estimarse como una denegación explícita del recurso;

IV. Que, aún en el supuesto de que la resolución que recae en la demanda ejecutiva pudiera ser conceptuada como un simple auto, cabe hacer presente que, en ningún caso, ella sería de aquellas que ordenan trámites necesarios para la substanciación regular del juicio, puesto que el Juez tiene que examinar el título y en vista de las disposiciones legales que rigen la materia, despachar o denegar la ejecución;

V. Que, discuriendo sobre la misma hipótesis de que la resolución de que se trata fuera un auto y no una sentencia interlocutoria, que es el carácter

que realmente tiene, puede agregarse que, si bien la ley no acepta la intervención del demandado antes de despacharse la ejecución, no quiere esto decir que le niegue la apelación de la resolución en que se despacha, o que la concesión del recurso cause embarazos o tenga inconvenientes en la causa, en primer lugar, porque ese auto sería de aquellos que por su naturaleza es apelable y la ley en parte alguna ha establecido lo contrario; en segundo término, porque debiendo concederse únicamente la apelación en lo devolutivo, conforme al N.º 1.º del art. 217 del Cód. de Enjuiciamiento del ramo, no se entorpecería en manera alguna la marcha del procedimiento ejecutivo y en tercer lugar, porque la apelación podría remediar con prontitud el error en que el juez de primera instancia pudiera haber incurrido al decretar el mandamiento;

VI. Que, en consecuencia, sea que la resolución que expide el Juez al solicitársele que despache mandamiento de ejecución tenga el carácter de sentencia interlocutoria, o sea, que se la considere como un simple auto, ella es apelable a juicio del Ministro disidente; y por lo tanto, correspondería entrar a conocer del fondo del recurso de

Sobre manifestación minera

469

apelación deducido por la parte ejecutada en su presentación de fs. 13, en contra de la resolución de fs. 5.  
Devuélvanse.

(Fdos.): *M. Núñez U.*—*Mario Léniz Prieto.*—*Urbano Marín.*— Proveído por la Iltma. Corte.— *E. Vásquez, Sec.*

**Sobre manifestación minera**

*DOCTRINA.*—*No procede constituir pertenencias mineras sobre aguas minerales.*

Temuco, veintinueve de marzo de mil novecientos treinta y cinco.

Vistos y teniendo en consideración:

1.º) Que en estas diligencias se persigue la constitución de propiedad minera sobre aguas minerales que surgen de varias vertientes ubicadas en el lugar "Panguil", distrito de Pucón, departamento de Villarrica, sosteniéndose por los peticionarios, y también por el Director del Departamento de Minas y Petróleo, — en su informe de fs. 2, — que el Cód. de Minería comprende, en el inc. 2.º del art. 3.º, el derecho de adquirir pertenencias de la clase indicada, esto es, sobre aguas minerales,

y que las de la manifestación contienen potasio, magnesio y aluminio;

2.º) Que el expresado Código legisla sobre minas y concede a los particulares la facultad de adquirirlas, de explotárlas y de constituir con ellas pertenencias mineras;

3.º) Que no definiendo, sino dando el mismo Código una acepción amplia a la palabra "mina", o sea, la que le corresponde en el sentido natural y obvio, según el uso general, la hace extensiva a las vetas, mantos y depósitos, cualquiera que sea su especie, su origen y la forma de su yacimiento; pero determinando siempre, en cada caso, los metales, sustancias minerales, piedras preciosas y fósiles que en ellos puedan contenerse, de tal modo que debe considerarse ajeno a sus pres-